

LABORATORIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESARIAL PARA UNA PAZ SOSTENIBLE (CLASP LAB)

10 de agosto, 2021

Carta abierta apoyando a la lideresa ambiental Jani Silva y denunciando al Gobierno colombiano por no protegerla ni investigar las amenazas en su contra

Escribimos esta carta abierta como participantes del Laboratorio de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible (CLASP Lab) para expresar nuestra solidaridad con nuestra colega, amiga y compañera del CLASP Lab, Jani R. Silva, y para instar al gobierno colombiano a protegerla a ella y a sus colegas de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). El CLASP Lab es un “laboratorio social” convocado por Corporate Accountability Lab, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la African Coalition for Corporate Accountability y Dejusticia. Los y las participantes son líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y abogados/as de justicia social provenientes de más de veinticinco países que colaboran para desarrollar estrategias para abordar la impunidad de los abusos ambientales y de derechos humanos cometidos por empresas en situaciones de conflicto, como Colombia.

Hace tres meses [denunciamos las amenazas de muerte](#) que Jani y miembros de ADISPA habían recibido por parte del grupo armado criminal *Comando de la Frontera* en relación con las décadas que llevan defendiendo la Reserva Campesina de la Perla Amazónica del Putumayo, Colombia, de violaciones de derechos humanos y ambientales por parte del gigante petrolero de propiedad chilena Amerisur Resources Plc (Amerisur). Las denuncias contra esta empresa incluyen contaminación del agua y la tierra, el desplazamiento y las presuntas violaciones del consentimiento libre, previo e informado.

Nuevamente condenamos los ataques del *Comando de la Frontera* contra Jani y ADISPA y las continuas fallas del gobierno colombiano para proteger a Jani, que recientemente la llevaron a ella y a su familia a [huir del territorio](#) que ha defendido durante décadas. El 23 de julio, Jani se vio obligada a desplazarse de su casa en Puerto Asís, Putumayo, luego de que se supo que el *Comando de la Frontera* había ideado un plan para asesinarla. Según los informes, un grupo de sicarios había comenzado a monitorear las rutinas de Jani y a rastrear sus movimientos. Esto

coincide con los informes de Jani sobre actividades sospechosas fuera de su casa en las semanas anteriores al descubrimiento del plan de asesinarla.

Exigimos acciones inmediatas para proteger a Jani y sus colegas de ADISPA e instamos al gobierno colombiano a garantizar el regreso seguro de Jani a hogar para que pueda ejercer su derecho internacionalmente reconocido de defender los derechos humanos. Desde 2020, las crecientes amenazas y el hostigamiento contra Jani y ADISPA, y la falta de una respuesta estatal adecuada, les ha impedido cada vez más defender los derechos humanos y el medio ambiente en Putumayo. Sin embargo, Jani nunca había tenido que escapar de Putumayo hasta ahora.

Como señalamos en nuestra carta anterior, en la que informamos sobre amenazas contra Jani, Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos y el medio ambiente. Al menos 101 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va del año, una cifra que se ha duplicado desde la escritura de nuestra carta anterior.

Debido a la impunidad por las amenazas contra Jani y ADISPA, el plan de asesinarla y el aumento de la violencia contra los líderes sociales en Colombia, exigimos que:

- Los gobiernos de Colombia y Chile investiguen y exijan la rendición de cuentas de GeoPark y Amerisur por sus impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en Putumayo y su conexión con la puesta en peligro de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, incluidas Jani y sus colegas de ADISPA;
- Amerisur proporcione información sobre su adhesión a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;
- El gobierno de Estados Unidos inste al gobierno colombiano a proteger la vida de Jani y sus colegas de ADISPA y asegurar que puedan asociarse libremente y defender los derechos humanos;
- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo investigue la situación y se comprometa a no renovar su proyecto con GeoPark en Putumayo, que suspendió por motivos de derechos humanos una semana después de iniciar la asociación a principios de este año;
- El gobierno colombiano tome medidas integrales para proteger a Jani y proporcione estas medidas sin interrupción, de conformidad con el derecho colombiano e internacional;
- El gobierno colombiano tome medidas integrales para proteger a los miembros de ADISPA y garantice que no se infrinja su libertad de asociación;
- El gobierno colombiano aborde el aumento significativo de las amenazas y la violencia contra defensores de derechos humanos y el medio ambiente en Colombia, les brinde mejores protecciones, y aborde las causas subyacentes de las amenazas y la violencia;
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoree la situación y se reúna periódicamente con Jani y ADISPA para implementar medidas de protección efectivas.

En solidaridad con Jani y ADISPA y en agradecimiento por su trabajo por un mundo mejor,

Participantes del Laboratorio de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible (CLASP Lab):*

(Firmas de organizaciones más abajo)

Abu Brima, Network Movement for Justice and Development

Alaa Talbi, Tunisian Forum for Economic and Social Rights-FTDES

Andressa Oliveira Soares, Homa - Human Rights and Business Centre

Blanca Velázquez, Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT)

Cynthia Denisse Arco Amarillo Lohr, Poder Latam

Dr. Tara Van Ho, Lecturer, University of Essex School of Law and Human Rights Centre

Edi Marina Parada, AMOMEGTO

Elizabeth Deligio, PhD

Emmanuel Umpula, African Resources Watch (Afrewatch)

Eric Kajemba, Observatoire Gouvernance et Paix

Gabriel Pereira, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales - ANDHES

Hermelinda Chicop Choxin, AFEDES

Isabella Ariza, Legal Fellow, Corporate Accountability Lab

Javier Malpartida, Tarpurisunchis

Juan Carlos Ruiz Molleda, Instituto de Defensa Legal-Perú

Karina Fernández Neira, Abogada defensora de derechos humanos, Chile

Krystel Bassil, Syrian Legal Development Programme

Milvian Aspuac, Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES)

Mouhanad Sharabati, Business & Human Rights Resource Centre

Nathalia Bonilla, Acción Ecológica

Pablo Gargiulo, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales - ANDHES

Padre Alfredo Dorea, Anglicano

Sandile Ndelu, Advocate

**Afiliación se brinda solo para efectos de identificación*

Firmas de organizaciones:

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales

African Coalition for Corporate Accountability

African Resources Watch (Afrewatch)

Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES)

Centre for Inclusive Governance Peace and Justice

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT)

Comisión Intereclesial Justicia y Paz

Corporate Accountability Lab

Dejusticia

EarthRights International

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

Forum Social Maghreb-Machrek

Homa - Human Rights and Business Centre

Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace)

Network Movement for Justice and Development

Observatoire Gouvernance et Paix

Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES)